



Arcadi España, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ayer en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ (EP)

Hacienda saca adelante la reforma de la financiación con solo dos apoyos

Los territorios del PP se desentienden del desplante del Gobierno de Ayuso a la reunión

LAURA DELLE FEMMINE
PABLO SEMPERE
Madrid

El Ministerio de Hacienda ha logrado que el nuevo modelo de financiación autonómica eche a andar, al menos por el momento. La propuesta de reforma salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer, aunque solo contó con los apoyos de Cataluña y Canarias. Todas las demás comunidades votaron en contra, tanto las del PP, partido que gobierna en la mayoría de los territorios, como las socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha. Más allá del rechazo generalizado, acudieron a la cita todos los representantes del Partido Popular pese a la petición lanzada sorpresivamente un día antes por la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que anunció que no iría al encuentro y propuso a sus homólogos que se sumaran al boicot con la esperanza de un plante masivo que obligara a Hacienda a desconvocar la cita. Sin embargo, nadie secundó la iniciativa, dejando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo en su desplante.

El nuevo modelo ha salido adelante porque el Gobierno, que

nistro, los grupos políticos podrán debatir el texto, así como ampliarlo y mejorarlo a través de enmiendas. “El Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo; es el Congreso el que debe tener la última palabra”, explicó. “Lo que hemos hecho es presentar una propuesta, que es lo que nos pidieron las autonomías”. Pese a que el llamamiento del Gobierno de Ayuso al boicot no ha tenido éxito, ningún consejero del PP criticó abiertamente la decisión de Madrid a su llegada a la reunión del CPFF ayer. El valenciano José Antonio Rovira fue el único en expresar públicamente cierto malestar. “No tiene ningún tipo de utilidad”, dijo a primera hora de la mañana, antes de entrar al ministerio.

“Respetamos la postura de las comunidades”, matizó Carolina España, su homóloga andaluza, también del PP. “Es un no alto y claro a un sistema de financiación injusto”. El *conselleiro* gallego, Miguel Corgos, también evitó polemizar. “Su posición es muy parecida a la nuestra”, afirmó en referencia al rechazo del Ejecutivo de Ayuso a la nueva financiación autonómica. “Lo que pasa es que la manifiesta de otra manera”.

cuenta con el 50% de los votos, solo necesitaba el apoyo de una comunidad. El titular de Hacienda, Arcadi España, celebró el resultado tras recordar en rueda de prensa que hacía 17 años que no se ponía sobre la mesa una reforma del sistema. También insistió en que se ha conseguido poner de acuerdo a dos comunidades como Cataluña y Canarias, de diferente color político. Esa voluntad de diálogo es la que el Ejecutivo quiere explotar en el trámite parlamentario que arrancará en las próximas semanas, una vez que Hacienda lleve el texto al Consejo de Ministros.

En el Congreso, recordó el mi-

La Comunidad de Madrid llamó a un boicot para forzar la desconvocatoria

El Gobierno tiene el 50% de los votos y solo necesitaba el sí de una autonomía

El sentir de las comunidades del PP lo trasladó al final de la cita la propia consejera andaluza, que habló a modo de portavoz: “El Gobierno ha recibido un no rotundo, porque hemos votado en contra el 90% de las comunidades”. Por eso, “esperamos que en el Congreso no encuentren los votos necesarios para aprobar la reforma”, dijo. Génova insiste en que lo importante no es el intento de boicot por parte de Madrid y el descuelgue del resto de territorios del PP, sino el rechazo generalizado de las comunidades a un nuevo modelo “al margen de toda España”, en palabras de la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Aunque esta fue la tónica generalizada, hay quien reconoce en privado que el gesto de Madrid ha generado malestar y se ha visto como un movimiento “desleal”. Algunas fuentes autonómicas han especulado que la jugada hasta puede ser contraproducente para la región capitalina, en un momento en el cual el foco mediático está puesto en la crisis migratoria de Ceuta. De hecho, la consejera ceutí, Kissy Chandiramani, compareció tras la reunión, arropada por los representantes del PP, para pedir medidas urgentes que permitan a la ciudad autónoma “volver a la normalidad” y blindar la “frontera sur de España y Europa”.

No es la primera vez que las decisiones unilaterales del Gobierno madrileño molestan al resto de barones regionales. La comunidad liderada por Díaz Ayuso tampoco comunicó oficialmente su ausencia al Ministerio de Hacienda, por lo que apareció en la reunión una silla vacía con su bandera. En cambio, envió un vídeo a la prensa en el cual la consejera Rocío Albert reiteraba los motivos de su desplante: que la reforma del sistema se ha acordado de forma bilateral entre el PSOE y ERC “a espaldas de las demás comunidades”.

“Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras”, lamenta Albert, “que atenta contra la igualdad de todos los españoles”. La consejera critica además la opacidad del ministerio acerca del esquema y lamenta que tanto el reparto de recursos propuesto como “la ansiada armonización” que promueve “por la puerta de atrás” perjudican a Madrid. “La Comunidad de Madrid exige una reforma del sistema de financiación que se debata de forma multilateral, con transparencia, con luz y taquígrafos. Una reforma que beneficie a todos los españoles y no solo a Sánchez y al independentismo”, zanja en el vídeo.

Madrid invitaba a las demás comunidades a que se sumaran al desplante para impedir que se alcanzara el *quórum* necesario para que la reunión tuviera validez. La normativa establece que, para poder constituir el consejo, es necesaria la asistencia de al menos la mitad de los miembros. Un veto masivo del principal partido de la oposición, que gobierna la inmensa mayoría de las autonomías, habría suspendido el encuentro.

Sin embargo, las autonomías del PP prefirieron presentarse en la sede del Ministerio de Economía con el objetivo de hacer constar su voto en contra de la propuesta de reforma, que en su opinión tiene el pecado original de haber sido pactada de forma bilateral con los catalanes de ERC. A los territorios del PP se han sumado Castilla-La Mancha y Asturias, en manos del PSOE, pero también contrarios al esquema que propone el Gobierno. Solo Cataluña, con quien se negoció inicialmente el modelo, y Canarias, que se sumó al sí a finales de julio, la secundaron.